

Santiago, veintiséis de febrero de dos mil veinticinco.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de los fundamentos sexto a noveno, que se eliminan.

**Y se tiene en su lugar y, además, presente:**

**Primero:** Que se alzan las demandantes en contra de la sentencia dictada en los autos Rol N° C-9744-2023, caratulados “Cisternas con Fisco de Chile”, seguidos ante el 29° Juzgado Civil de esta ciudad que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios impetrada por las actoras por la que reclaman el daño moral como víctimas por repercusión como consecuencia de las detenciones ilegales, torturas, vejaciones y otros tratos inhumanos por agentes del Estado, del que fueron víctimas directas sus respectivos cónyuges, por estimar el sentenciador *a quo* que dicho detrimento no fue suficientemente acreditado.

**Segundo:** Que sobre el daño por repercusión se dice que es el que afecta a personas distintas del sujeto inmediatamente lesionado y que se plantea, principalmente, en casos de lesiones corporales o muerte de la víctima inicial, dado que junto al perjuicio que padece el inmediatamente afectado por accidente, las personas que con él se relacionan afectiva o patrimonialmente también se ven perjudicadas. Estas no son víctimas inmediatas, en la medida que el impacto esencial del hecho ilícito no los afectó directamente, pero a pesar de ello sufren un daño a consecuencia del mismo hecho, al verse alcanzadas en sus afecciones, en sus medios de subsistencia o por los desembolsos en que deben incurrir para atender a la víctima principal. También se le denomina daño indirecto, pero no porque se rompa la relación de causalidad con el hecho que provocó el daño inicial, sino porque hay dos tipos de víctimas, la inicialmente dañada, la que sufre el daño en su propia integridad corporal, y la indirectamente perjudicada, no en su cuerpo o salud, sino en la esfera pecuniaria o en la moral o en ambas, cuyo daño es también originario e independiente del anterior.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EKNJXSPVTZ

**Tercero:** Que al respecto, resulta necesario destacar la evolución jurídica que ha experimentado la reparación del daño moral y en especial cuando este corresponde a un detrimento reflejo, por repercusión o rebote, esto es, el sufrido por personas como consecuencia de las lesiones o muerte de otro. Ámbito, este último en que los mayores dilemas jurídicos dicen relación con el establecimiento de límites en la titularidad de la acción y con la determinación de los intereses protegidos por el derecho para las víctimas.

En tal sentido, cabe señalar que la indemnización por daño moral no era reconocida en el derecho patrio ni comparado de la época de la promulgación del Código Civil, y que, por el contrario, la única norma que concretamente se refería a la materia (el artículo 2331), lo declaraba excluido de toda indemnización pecuniaria. En consecuencia, el otorgamiento de una acción indemnizatoria por ese concepto ha tenido su origen en un desarrollo jurisprudencial, equivalente al ocurrido en general en el derecho comparado, y no en una disposición legal precisa, lo que también ha sucedido respecto de la determinación de quienes pueden reclamar el daño moral por rebote.

**Cuarto:** Que tal evolución da cuenta en sus inicios de una posición doctrinaria y jurisprudencial más bien restrictiva respecto de la titularidad de la acción resarcitoria en comento, destacando en este sentido la sentencia de la Corte Suprema, de fecha 29 de mayo de 2002, dictada en causa rol N°4784-2000, en la que se señaló: “11°) Que en particular la norma del artículo 2329 no puede ser interpretada literalmente, como si concediera una extensa acción indemnizatoria por el daño moral sufrido por la muerte de otra persona, no sólo porque la disposición, como se ha expresado, no tuvo originariamente en vista reconocer reparación por ese tipo de daño, sino, además, porque su finalidad es normar situaciones en que atendidas las circunstancias del accidente se puede presumir que el daño resultante puede ser atribuido a la acción ajena negligente, y que,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EKNJXSPVTZ

por el contrario, nada indica que su sentido sea formular una definición en extremo extensiva del daño reparable”.

En fallos posteriores del máximo tribunal, ha ido recogiendo una posición más amplia que considera que la muerte o daño de una persona puede causar a otro, variados perjuicios no patrimoniales, de manera que todo aquel que acredite haber tenido relaciones de afecto con la víctima y que haya experimentado una real aflicción a raíz de su deceso o afectación de su integridad física podrá ser titular de la acción de indemnización de perjuicios.

En relación con lo anterior, la profesora Carmen Domínguez Hidalgo explica que “la práctica de los tribunales ha sido la de conceder el derecho a la acción a los parientes cercanos de la víctima directa y sosteniéndose incluso una verdadera presunción de dolor o sufrimiento para ellos, de forma de no requerirse su prueba”; “se ha llegado a señalar que los titulares de la acción son todos los familiares, entendiéndose por tales a todos los que componen el grupo social”, sin requerir que éstos tengan el carácter de herederos forzosos o sucesores (El Daño Moral, Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, 1º Edición, mayo 2000, pág. 739 y siguientes).

En este sentido, cabe consignar lo señalado por la Corte Suprema en causa rol N° 31.713-2014, en fallo de 25 de noviembre de 2015:

“Décimo octavo: Que el ilícito puede dañar no sólo a la víctima directa, personalmente afectada, sino a otras personas. El daño experimentado por éstas es consecuencia del personalmente sufrido por otra, constituyendo el denominado daño “parricochet”, por contragolpe, por rebote o por repercusión. Estos terceros, respecto de quienes también se produce perjuicio injusto, son igualmente víctimas y tienen el mismo título de quien ha sufrido el daño personal, y por eso disponen de una acción autónoma para la reparación a su propio daño independientemente del resarcimiento del causado al accidentado o fallecido. La condición de damnificado indirecto o por repercusión surge



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EKNJXSXPVTZ

no de un daño directo a su persona o bienes sino como consecuencia de un daño causado a otro con quien guarda alguna relación. El menoscabo puede ser patrimonial, por ejemplo, al verse privados de la ayuda o auxilio pecuniario o de beneficios que él personalmente ofendido les proporcionaba. Es el caso de alimentarios legales o voluntarios que vivían a expensas del ofendido, o el de los que mantenían una relación profesional, laboral o empresarial con quien perdió la vida o sufrió la incapacidad estando económicamente vinculado a él (Fabián Elorriaga De Bonis. Del Daño por Repercusión o Rebote. Revista de Derecho Chileno N° 26, año 1999, página 374). El detrimento también puede ser –y lo es con más frecuencia- de carácter extrapatrimonial o moral.

Si se admite el daño por repercusión, proveniente de daños a las cosas, a fortiori debe ser reconocido tal efecto en caso de daño causado a las personas. Ha dicho esta Corte “si la destrucción del capital que consiste en cosas puramente materiales puede dar origen a indemnización, sería bien poco lógico pretender que el capital humano –muchísimo más respetable- no pueda ser fundamento para una acción de perjuicios” (Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LI, Sección 1ª, página 384)”.

“Décimo noveno: Que es posible que el daño moral como repercusión del perjuicio sufrido por otro sea pretendido por varias personas pudiendo ser complejo discernir sobre el derecho de reparación por este tipo de daños. Ello porque, como ha dicho la jurisprudencia, “el daño moral es de índole netamente subjetiva y su fundamento se encuentra en la propia naturaleza de la psicología afectiva de cada ser humano, de manera que puede decirse que tal daño se produce siempre que un hecho externo afecta a la integridad física o moral de un individuo” (Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LVIII, Sección 1ª, página 374).

El fenómeno de la pluralidad de víctimas es frecuente en situaciones dañosas que acontecen en el tráfico social. Como dicen Aubry



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EKNJXSPVTZ

y Rau “el mismo hecho puede dar nacimiento a muchas acciones que tiendan a reparaciones distintas, nacidas en interés de personas diferentes y de tal naturaleza que permiten ser ejercida simultánea o aisladamente por ellas, sin que el ejercicio de una pueda tener un efecto cualquiera sobre el ejercicio de las otras” (Aubry y Rau, Curso de Derecho Civil Francés, Tomo VI, página 348 Marchal et Billar, París, 1902).

Un mismo delito o cuasidelito puede dañar a varias personas y en distinta forma. En tales casos, si se dan los requisitos de la responsabilidad respecto de todos, el juez debe conceder a cada demandante una indemnización distinta, considerando la entidad del daño sufrido y probado respecto de cada uno. La acción de responsabilidad pertenece a todos los que sufren el perjuicio causado por el ilícito, esto es, a la víctima directa y a la que lo es por repercusión. No debe haber restricción o condición de admisibilidad para demandarla, porque se reconoce acción de reparación a todo sujeto que tenga interés en ello, por la sola autoatribución o mera afirmación de corresponderle un derecho o una situación jurídica, sin perjuicio que la procedencia final de su pretensión habrá de ser juzgada con arreglo al derecho sustantivo que regula este derecho subjetivo. La doctrina reconoce que en ausencia de norma limitativa o que establezca prelación, revisten carácter de damnificados indirectos quienes demuestran perjuicio a raíz del fallecimiento de la víctima. Para pretender el resarcimiento del daño basta que éste consista en el menoscabo de un interés legítimo, en el sentido de ser digno de protección, esto es, el que se encuentra en la esfera propia de las personas aunque carezca de un medio de protección legal que autorice su obtención compulsiva a través del derecho.

Nuestro ordenamiento, exceptuado el artículo 2315, no ha explicitado mayormente quiénes son damnificados indirectos por lo que se estima que existe titularidad cuando hay un interés quebrantado por el hecho dañoso. La legitimidad de ese interés puede estar reconocida en



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EKNJXSPVTZ

normas positivas explícitas o por el derecho en general en cuanto no contravenga la ley, la moral o las buenas costumbres.

A partir de esta concepción amplia se reconoce hoy legitimación para la reparación de perjuicios en caso de muerte de concubinos, de la madre de crianza, de novios, de hermanos resultantes de vínculo no matrimoniales o por la muerte de un socio, de un tutor, etc. Vale decir, se legitima el derecho de reparación a partir de invocar un interés digno de protección y extiende la legitimación sin mayores restricciones a familiares diversos o más distantes que los hijos o el cónyuge. Ciertamente en todos estos casos el demandante deberá probar cumplidamente el perjuicio que invoca.

Nuestra jurisprudencia ha reconocido acción indemnizatoria por daños patrimoniales o extrapatrimoniales a personas repercutidas por el hecho ilícito, sin consideración a vínculos de familia por el difunto: a quien vivía a sus expensas o era ayudado económicamente por el difunto en forma voluntaria; al empleador que sufre perjuicio por la muerte de un trabajador; al socio a quien perjudica la muerte de su consocio en los negocios societarios. En el ámbito del daño moral por repercusión, el elenco de sujetos activos de la acción debe atender exclusivamente al principio de que toda persona que demuestra un perjuicio cierto tiene derecho a resarcimiento y no cabe limitar el ejercicio de esta acción a la existencia de un vínculo parental o de familia.

Esta Corte Suprema ha señalado que no es necesario ser heredero o sucesor de la víctima para pedir la reparación del perjuicio (Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo XXI, Sección 1ª, página 1053).

Esto no obsta a que la pretensión de ser damnificado exige afirmar un vínculo con quien fue la víctima directa. De otro modo se diluiría el nexo de causalidad entre el hecho y el daño pretendido, indispensable para la responsabilidad. Este vínculo, en el ámbito del daño extrapatrimonial, es generalmente afectivo, aunque no necesariamente parental o matrimonial y él deberá ser establecido sin que baste la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EKNJXSPVTZ

relación puramente legal ya que -como ha escrito un autor- la muerte hasta puede producir alivio, más que dolor, a los parientes próximos y, en cambio, afectar profundamente a terceros en sus sentimientos y en sus relaciones de vida por la proximidad que mantenían con el difunto.

Es cierto que se mira con cautela a los actores que invocan un daño por repercusión de carácter extrapatrimonial en caso de muerte o lesión de la víctima, advirtiendo que un criterio amplio sobre la materia podría multiplicar las demandas indemnizatorias y hacer inoperante el sistema, por lo que algunos sostienen la necesidad de articular una especie de prelación entre los posibles afectados por rebote (Corral Talciani, Hernán. Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual, página 318), pero los parámetros correctivos, en aras de la seriedad y plausibilidad de la pretensión de menoscabos morales, no parecen legítimos, en ausencia de norma. La restricción sólo puede resultar de la consideración rigurosa de los supuestos de la obligación indemnizatoria, fundamentalmente certidumbre del daño, legitimidad del interés que se dice lesionado, inmediatez del daño y carácter personal del perjuicio. Al respecto el profesor Corral señala “una prelación entre los posibles afectados por rebote llamando preferentemente al cónyuge e hijos no parece condecirse con la autonomía del daño que se pretende indemnizar: ¿por qué el daño del hijo necesariamente es mayor que el del padre?”. Por su parte, el profesor Fabián Elorriaga recuerda “La indemnización de las víctimas por el rebote es una compensación individual y no colectiva” (Elorriaga, Fabián. Publicación mencionada, página 391). Por su parte, el maestro Alessandri recomendaba “A fin de evitar la multiplicidad de acciones por daño moral, ya que podrían ser numerosísimas las personas que se lamentaren del mal acaecido a otra o pretexto del afecto que le tenían, su indemnización sólo debe acordarse en favor de aquellas que acrediten haber sufrido real y afectivamente un dolor profundo y verdadero” (Alessandri Rodríguez, Arturo. De la



Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno, Imprenta Universitaria, Santiago, 1943, página 464)”.

**Quinto:** Que de lo expuesto aparece que a pesar de las diferencias que presentan las posiciones reseñadas sobre la titularidad y procedencia para reclamar por daño moral de las víctimas por repercusión, lo cierto es que tanto en aquella en que se restringe su procedencia a aquellos miembros más cercanos del núcleo familiar de la víctima, existiendo una especie de orden de prelación entre estos, como en la que acepta una titularidad que se extiende a todo el que tenga un interés legítimo, por haber sido afectado por lo que le ocurrió a otra persona, la procedencia de la acción indemnizatoria se encuentra subordinada al imperativo de demostrar en el proceso por quien la reclama, haber sido afectado por este hecho, es decir, haber sufrido un perjuicio afectivo significativo.

De lo anterior, se concluye que la evolución doctrinaria y jurisprudencial ha sido la de no privar ni excluir en forma previa, del ejercicio de la acción indemnizatoria por responsabilidad aquiliana, a quien pueda reclamar una afectación a los parámetros antes referidos, como ocurre en el caso de autos, en que aunque puedan mezclarse distintos hechos o elementos en el libelo, lo cierto es que el fundamento basal de la acción, es la afectación que habrían sufrido las actoras como consecuencia de los ilícitos de que fueron víctima sus cónyuges, entre los cuales, se comprenden las torturas y padecimientos que conculcaron la integridad física de éstos. De manera que debe desecharse la excepción de falta de legitimación activa invocada por el demandado y aquellas alegaciones que cuestionan la procedencia del ejercicio de la acción intentada por éstas por no tratarse de un caso de muerte o accidente, pues tales limitaciones no aparecen recogidas por el ordenamiento jurídico en la regulación del estatuto jurídico en análisis.

**Sexto:** Que, lo anterior, es sin perjuicio de que este daño, para activar la respuesta de la responsabilidad aquiliana debe cumplir con las exigencias que señala la ley, esto es, la existencia de una acción u



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EKNJXSPVTZ



omisión culposa o negligente y la relación de causalidad, entre estos y, en la medida en que sea un daño cierto, y por tanto probado, de acuerdo con las reglas generales.

En efecto, como todo daño, “el de carácter moral debe probarse”, procediendo para ello todos los medios de prueba admisibles (Hernán Corral Talciani, “Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual”, LegalPublishing, Segunda edición, año 2013, pág. 157).

Al respecto, cabe precisar que para que proceda la indemnización por daño moral por repercusión este también debe ser cierto y directo con el o los hechos ilícitos que fundan la responsabilidad y estar revestido de cierta significación o relevancia, para ser indemnizable. De lo contrario se desnaturalizaría la función reparadora del instituto en comento. Dichas circunstancias deben ser probadas o deducidas del mérito del proceso, debiendo tal prueba acomodarse a su naturaleza especial y observarse con cautela y razonabilidad.

En este sentido no puede desconocerse que, sin ocupar un orden fijo de prelación, ante las demandas de familiares más próximos, como cónyuges e hijos o familiares que conviven con la víctima, se tiende a deducir con más facilidad la existencia del daño, mientras que para otros parientes así como para personas que sólo tienen lazos de afecto con la víctima, se exige prueba más contundente. De modo que la prueba presenta mayor relevancia en la medida que la relación del pretensor se aleja del grupo familiar directo de la víctima, ya que se precisará justificar finalmente la condición de cercanía y sufrimiento por su pérdida, por no ser esta evidente. (SCS, 13 de junio de 2019, rol N°5473-2018).

**Séptimo:** Que en caso sub lite en el análisis sobre el cumplimiento o configuración de tales exigencias, no puede desconocerse, que son hechos establecidos por encontrarse acreditados y no haber sido controvertidos -tal como lo deja asentado el fallo de primer grado- que los cónyuges de las cuatro demandantes, fueron calificados como víctimas en el listado de prisioneros políticos y torturados elaborado por la Comisión



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EKNJXSXPVTZ

Nacional sobre Prisión Política y Tortura; los que fueron detenidos injustificadamente en diversas oportunidades, a partir del 11 de septiembre de 1973, por motivaciones política y por la acción de agentes del Estado, siendo víctimas directas de crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, de la prueba instrumental allegada al proceso, consistente en certificados de matrimonio, se acredita que las actoras contrajeron matrimonio con sus respectivos cónyuges, en fechas cercanas o próximas a aquellas que se produjeron las detenciones y tratos vejatorios de que éstos fueron víctima, hechos a los que éstos sobrevivieron, sin demandar al Estado de Chile por los ilícitos de que fueron objeto.

También de la prueba documental acompañada, consistente en certificados de nacimiento, se acredita que las demandantes tuvieron hijos con sus respectivos cónyuges. Doña Luz Alarcón Carmona con don Arnoldo Díaz Madariaga, tuvieron una hija que nació en el año 1969; doña Margarita Cisternas Miranda con don Manuel Antonio Carvajal, tuvieron tres hijos que nacieron en los años 1974, 1976 y 1981; doña Rosa González Hoch con su cónyuge don Manuel Zelada León, tuvieron dos hijos, cuyos nacimientos acontecieron los años 1974 y 1981; y doña María Del Rosario Saavedra Cortés con don Alberto Barraza Veliz tuvieron un hijo en el año 1983.

Además, las demandantes acompañaron al proceso, informes psicológicos de cada una de ellas, los que fueron elaborados por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud, (PRAIS), que es un programa del Ministerio de Salud de Chile que brinda atención gratuita a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, los que dan cuenta de haber entrevistado y examinado a las actoras, concluyendo la evidencia de afectación psicológica y dolor experimentado por las mismas, como consecuencia, de los actos ilegales de lesa humanidad de que sus respectivos cónyuges fueron víctima directa. Se trata de un dolor, un daño que se refiere y explica en razón de la comunidad de vida que



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EKNJXSXPVTZ

cada una de las actoras, conformaban a la época de ocurrencia de los hechos, con los detenidos y torturados y los hijos comunes.

**Octavo:** Que de los presupuestos fácticos antes anotados, concordantes con el conjunto de antecedentes aportados a los autos, cabe desprender, al tenor de lo que disponen los artículos 426 del Código de Procedimiento Civil y 1712 del Código Civil, presunciones graves, precisas y concordantes, suficientes a juicio del tribunal, para formar el convencimiento legal de que las demandantes -como consecuencia de los actos vejatorios de que fueron objeto sus cónyuges y padres de sus hijos menores- sufrieron daño emocional o psicológico, calificado como reflejo o por rebote, que no puede desconocerse, en razón de la estrecha vinculación que tenían a la fecha en que se perpetraron los crímenes de tanta gravedad y entidad.

En la especie se trata de presunciones graves porque los hechos que se aducen son convincentes y concluyentes, además, son precisas desde que todas ellas miran a la misma conclusión y no adolecen de ambigüedad o vaguedad y, finalmente, son concordantes porque guardan relación y conexión entre sí, sin que se adviertan contradicciones que pudieran destruirlas; encontrando, además, fundamento en el principio de la normalidad, conforme al cual la existencia del daño en los familiares mas cercanos, es lo razonable y común. En este sentido, la autora Carmen Domínguez, expresa en relación al daño moral que “ha de existir una mayor flexibilidad en su apreciación y que puedan admitirse algunas presunciones por ejemplo en materia de daño por repercusión o rebote, basadas en que normalmente los atentados sufridos por la víctima generan un perjuicio de afección en quienes tienen con ella un vínculo de parentesco”. (Autora citada en su obra “El principio de Reparación Integral en sus contornos actuales”. Thomson Reuters. 2019, pág. 43).

**Noveno:** Que, en consecuencia, encontrándose acreditada la existencia de la aflicción y dolor invocada -elementos propios del daño moral- y la existencia de los demás elementos de procedencia de la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EKNJXSXPVTZ

acción indemnizatoria impetrada, en la calidad que han fundado las demandantes, deberá acogerse la demanda, disponiéndose la reparación de tales perjuicios, procediéndose a su regulación prudencial, en la suma de \$15.000.000 para cada una de las demandantes. Habiéndose solicitado en la demanda que la suma que se otorgue por daño moral lo sea, además, con reajustes e intereses, se debe dar lugar a tal pretensión, teniendo en consideración para ello, en relación a la época a partir de la cual deben computarse los reajustes de los montos correspondientes a la indemnización civil por los perjuicios experimentados por las demandantes, que en tanto tal ítem tiene por objeto únicamente mantener el poder adquisitivo del dinero y tratándose del resarcimiento del daño extrapatrimonial de origen extracontractual, éstos han de contabilizarse desde que existe certeza inamovible de la efectividad del hecho de que emana la obligación de indemnizar y ésta se hace actualmente exigible, lo que corresponde a la fecha en que el fallo queda ejecutoriado o causa ejecutoria. Dicha suma, así reajustada, devengará además intereses corrientes para operaciones reajustables los que se contabilizarán, eventualmente, desde que el deudor se constituya en mora de su pago.

**Décimo:** Que por último cabe señalar que dada la especial naturaleza de los ilícitos cometidos, lo que surge de los hechos que da cuenta la causa, no controvertidos por el demandado, aparece que ellos, que son el fundamento de la demanda, constituyen crímenes de lesa humanidad y, por ende, una violación grave a las normas internacionales sobre Derechos Humanos, por lo que resulta improcedente declarar la prescripción de la acción indemnizatoria ejercida, tal como ha sido resuelto en forma reiterada por esta Corte. En efecto, en esta clase de delitos, en que la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil que de ellos deriva esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EKNJXSPVTZ

sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, la que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley N°19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario.

También deben descartarse las alegaciones con que el demandado Fisco de Chile pretende excepcionarse del pago de una suma indemnizatoria o rebajar la que se le asigne en razón de haber operado ya la reparación mediante el otorgamiento de los beneficios de la Ley N°19.992 y N°20.874, al no existir incompatibilidad legal alguna entre las reparaciones otorgadas en por estas leyes y la indemnización reclamada.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en las disposiciones legales citadas y artículos 186, 223 y 227 del Código de Procedimiento Civil, **se resuelve que:**

**I.-se revoca** la sentencia apelada de veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, dictada por el 29° Juzgado Civil de Santiago, en los autos caratulados "Cisternas con Fisco de Chile", que rechazó la demanda y de indemnización de perjuicios, interpuesta por el abogado Boris Paredes Bustos, en representación de Rosa Emilia González Hoch, Margarita del Rosario Cisternas Miranda, Luz del Carmen Alarcón Carmona y María Del Rosario Saavedra Cortés González, en contra del Fisco de Chile, y en su lugar se declara que se la **acoge** solo en cuanto se condena al demandado a pagar a cada una de las demandantes la suma de \$15.000.000.- (quince millones de pesos), a título de daño moral, más



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EKNJXSPVTZ

reajustes conforme al alza del Índice de Precios al Consumidor que se devenguen a contar de la fecha en que esta sentencia quede ejecutoriada y hasta la de su pago efectivo, con reajustes que se contabilizarán desde que el deudor sea constituido en mora.

II.- se rechazan las excepciones de reparación integral y de prescripción.

III.- no se condena en costas, al demandado por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción de la ministra Carolina Brengi Zunino.

**Civil N° 8163-2024.**

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por la Ministra señora Carolina Brengi Zunino, el Ministro (S) señor Matias Felipe De La Noi Merino y el Abogado Integrante señor Renee Rivero Hurtado. Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltrma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintiséis de febrero de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EKNJXSXPVTZ



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EKNJXSPVTZ

Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Carolina S. Brengi Z., Ministro Suplente Matias Felipe De La Noi M. y Abogado Integrante Renee Rivero H. Santiago, veintiseis de febrero de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintiseis de febrero de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EKNJXSPVTZ